



# Asamblea General

Distr. general  
13 de junio de 2022  
Español  
Original: inglés

## Consejo de Derechos Humanos

49º período de sesiones

28 de febrero a 1 de abril de 2022

Tema 4 de la agenda

**Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo**

## **Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Thomas H. Andrews\* \*\***

### *Resumen*

Este informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar se presenta de conformidad con la resolución 46/21 del Consejo de Derechos Humanos.

Trece meses después de dirigir un golpe de Estado contra el Gobierno, una junta militar ilegal ha librado una guerra implacable contra el pueblo de Myanmar y sus derechos fundamentales. Los resultados han sido devastadores. Las fuerzas de la junta han matado al menos a 1.600 civiles, y más de 500.000 personas han sido desplazadas. La mitad de la población ha caído en la pobreza. La Organización Mundial de la Salud prevé que este año se producirán más de 47.000 muertes evitables en Myanmar. Trece millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria.

En el informe, el Relator Especial destaca algunas de las más graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Myanmar durante el período comprendido entre septiembre de 2021 y febrero de 2022. Documenta los violentos ataques de los militares contra la población civil, que incluyen ataques aéreos, lanzamientos de morteros, incendios provocados, ejecuciones extrajudiciales y el uso del trabajo forzoso y de escudos humanos. Describe la campaña de la junta para detener y encarcelar a activistas, periodistas, manifestantes pacíficos y otros opositores. Documenta la criminalización por la junta de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión. También comparte las experiencias de quienes han sido sometidos a tortura y otros malos tratos durante períodos de reclusión. Muchos de estos ataques constituyen probables crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, y sus autores deben ser llevados ante la justicia.

\* Este informe se presenta con retraso para incluir en él la información más reciente.

\*\* Los anexos del presente informe se distribuyen tal como se recibieron, únicamente en el idioma en que fueron presentados.



En el informe, el Relator Especial describe los esfuerzos del pueblo de Myanmar para oponerse a la junta militar y defender su nación. Dirigidos por un gran número de jóvenes, entre ellos muchas mujeres, los organizadores de las protestas han demostrado una gran habilidad, tenacidad y creatividad en la movilización de la oposición a pesar de la amenaza casi constante de encarcelamiento o muerte. El Relator Especial se siente inspirado por su determinación y sus incansables esfuerzos.

Para que el pueblo de Myanmar triunfe se precisa un apoyo mucho más sólido de la comunidad internacional. El informe concluye con recomendaciones específicas que el Relator Especial insta al Consejo de Seguridad y a los Estados Miembros a que tengan en cuenta.

# Índice

|                                                                                      | <i>Página</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I. Introducción .....                                                                | 4             |
| II. La violencia y los ataques de la junta contra la población civil .....           | 5             |
| A. Ataques contra la población civil.....                                            | 5             |
| B. Desplazamiento forzado .....                                                      | 7             |
| C. Destrucción de bienes civiles.....                                                | 7             |
| D. Ejecuciones de civiles.....                                                       | 8             |
| E. Trabajo forzoso y utilización de civiles como escudos humanos .....               | 9             |
| III. Emergencia humanitaria.....                                                     | 10            |
| Obstrucción de la entrega de ayuda humanitaria.....                                  | 11            |
| IV. La persecución de la junta a sus opositores.....                                 | 11            |
| A. Oposición no violenta en curso.....                                               | 12            |
| B. Ataques contra manifestantes pacíficos .....                                      | 12            |
| C. Detención y reclusión arbitrarias .....                                           | 13            |
| D. Tortura, otros malos tratos y muertes durante la reclusión .....                  | 13            |
| E. Juicios y condenas por motivos políticos.....                                     | 14            |
| V. Los derechos de las mujeres y las niñas .....                                     | 15            |
| Violencia de género.....                                                             | 15            |
| VI. Derechos del niño.....                                                           | 16            |
| VII. Libertad de expresión, de reunión y de asociación.....                          | 17            |
| A. Libertad de los medios de comunicación.....                                       | 17            |
| B. Restricciones de Internet.....                                                    | 18            |
| C. Vigilancia.....                                                                   | 18            |
| VIII. Los derechos humanos de los rohinyás .....                                     | 19            |
| IX. Respuesta internacional.....                                                     | 20            |
| X. Recomendaciones.....                                                              | 20            |
| <br>Anexos                                                                           |               |
| I. Armed engagements and other attacks in Myanmar, 1 February 21–28 March 2022 ..... | 23            |
| II. December 2021 Bangladesh mission findings and conclusions .....                  | 24            |

## I. Introducción

1. Más de 13 meses después de derrocar a un gobierno elegido democráticamente, la junta de Myanmar ha intensificado su guerra contra el pueblo de Myanmar. Los militares han intensificado sus ataques indiscriminados contra la población civil, utilizando aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería pesada, y aldeas enteras han quedado destruidas por incendios provocados por soldados. Civiles y combatientes han sido torturados, violados, ejecutados y utilizados como escudos humanos.
2. La magnitud de estas atrocidades es inmensa. Según estimaciones conservadoras, las fuerzas de la junta han dado muerte a por lo menos 1.600 civiles. Actualmente hay casi 10.000 personas recluidas por su oposición al régimen militar, y la junta ha modificado el código legal para criminalizar aún más el ejercicio de los derechos fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión. Más de 500.000 personas han sido desplazadas desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, con lo que el número de desplazados internos en Myanmar asciende actualmente a más de 800.000. Decenas de miles de personas que han buscado refugio en Bangladesh, la India y Tailandia han pasado a engrosar las filas del aproximadamente millón de refugiados de Myanmar en los países vecinos.
3. Muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas por la junta constituyen probables crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Se debe exigir a los responsables que rindan cuentas de sus actos.
4. En el informe, el Relator Especial destaca algunas de las más graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Myanmar en el período comprendido entre septiembre de 2021 y febrero de 2022. Documenta los violentos ataques de los militares contra la población civil, que incluyen ataques aéreos, lanzamientos de morteros, incendios provocados, ejecuciones extrajudiciales y el uso del trabajo forzoso y de escudos humanos. Estos ataques han creado y profundizado la grave crisis humanitaria que padece actualmente el país, amenazando los medios de subsistencia, la salud y la vida de millones de personas. El Relator Especial describe la campaña de la junta para detener y encarcelar a miles de activistas, periodistas, manifestantes pacíficos y otros opositores. También comparte las experiencias de quienes han sido sometidos a tortura y otros malos tratos durante períodos de reclusión. Describe los peligros y problemas de derechos humanos a los que se enfrentan particularmente las mujeres y los niños, y describe los esfuerzos de la junta para criminalizar y suprimir de otro modo los derechos y las libertades fundamentales. También describe la terrible situación de los derechos humanos de la población rohinyá en el estado de Rakáin, incluidos los que están confinados en los campamentos de desplazados internos.
5. En diciembre de 2021, el Relator Especial viajó a Bangladesh en el marco de su evaluación general de la situación de los derechos humanos de la población rohinyá de Myanmar. En un anexo al presente informe, reflexiona sobre su viaje, destacando el papel que la población y el Gobierno de Bangladesh desempeñaron para salvar a un número incalculable de rohinyás que huían de los ataques genocidas del ejército de Myanmar en el estado de Rakáin. Hace recomendaciones con respecto a la protección y el apoyo a los rohinyás en los campamentos de refugiados de Bazar de Cox y en la isla de Bhasan Char.
6. El informe sigue a la publicación, en febrero de 2022, del documento de conferencia del Relator Especial sobre la venta de armas al ejército de Myanmar<sup>1</sup>. En el presente informe, subraya las preocupaciones planteadas en ese documento, a saber, que varias naciones siguen vendiendo o autorizando la transferencia de armas de guerra al ejército de Myanmar, a sabiendas de que es casi seguro que esas armas se utilizarán en ataques contra la población civil. Esas transferencias violan el derecho internacional.

<sup>1</sup> Véase <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc49crp1-conference-room-paper-special-rapporteur-enabling-atrocities>.

7. Muchas personas en Myanmar —incluidas las víctimas de abusos contra los derechos humanos y sus familiares, algunos de los cuales se mencionan en el presente informe— han dicho al Relator Especial que están profundamente decepcionadas por la incapacidad de la comunidad internacional para actuar con decisión a fin de ayudar a prevenir las atrocidades y hacer que los autores rindan cuentas. El Relator Especial reitera su llamamiento al Consejo de Seguridad para que adopte una resolución que imponga un embargo de armas y sanciones económicas selectivas contra el ejército de Myanmar y remita la situación de ese país a la Corte Penal Internacional. Explica las medidas que deberían tomar los Estados Miembros en ausencia de medidas del Consejo de Seguridad. El Relator Especial observa las medidas firmes y rápidas que han tomado los Estados Miembros en favor de la población de Ucrania e implora a la comunidad internacional que actúe de forma similar para proteger a la población de Myanmar. También ella es víctima de un brutal e implacable ataque militar.

8. El Relator Especial reitera su profunda admiración por el valor y la resiliencia del pueblo de Myanmar. Se ha sentido inspirado por la valentía de los supervivientes de violaciones de derechos humanos que han corrido grandes riesgos personales para hablar con él, la inventiva de los activistas que han encontrado formas nuevas y creativas de desafiar el régimen militar, y la resiliencia de las comunidades que se han recuperado repetidamente de los ataques perpetrados durante muchos meses, años o decenios. El Relator Especial considera un honor poder compartir sus historias y sus palabras en el presente informe. También agradece a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos, a los grupos locales de derechos humanos, a los Estados Miembros y a los programas y organismos de las Naciones Unidas que han contribuido al informe.

## **II. La violencia y los ataques de la junta contra la población civil**

9. El ejército sigue atentando contra la población civil con ataques aéreos, fuego de mortero, disparos indiscriminados e incendios provocados. Personas recluidas por las fuerzas de la junta han sido ejecutadas, torturadas, violadas y utilizadas para realizar trabajo forzoso y como escudos humanos. Cientos de miles de civiles se han visto afectados por estas graves violaciones de los derechos humanos.

10. Los ataques de la junta contra los civiles se han perpetrado de forma generalizada y sistemática. El Relator Especial subraya que estos ataques constituyen probables crímenes de lesa humanidad, incluidos los crímenes de asesinato, esclavitud, traslado forzoso, tortura, violación y violencia sexual. Cuando los ataques de la junta se producen en el contexto de un conflicto armado, constituyen probables crímenes de guerra, incluidos los crímenes de muerte intencional, tortura y trato inhumano, destrucción de bienes, obligación de servir en fuerzas hostiles, traslado ilegal, saqueo, violación, violencia sexual y desplazamiento de civiles. Los autores y artífices de estos crímenes deben rendir cuentas. Dado que los militares de Myanmar han cometido, con impunidad y durante decenios, crímenes que han sido orquestados al más alto nivel de la cadena de mando militar, la comunidad internacional debe actuar para garantizar la rendición de cuentas.

11. Durante el período del informe, los estados de Chin y Kayah y las regiones de Sagaing y Magway sufrieron un fuerte aumento de la violencia como consecuencia de los ataques de las fuerzas de la junta contra la población civil y los contraataques asimétricos de grupos armados de la oposición contra las unidades militares. Mientras tanto, el conflicto se ha intensificado en zonas étnicas afectadas por la guerra desde hace tiempo, como los estados de Shan, Kachín y Kayín. El alto el fuego entre los militares y el Ejército de Arakán en el estado de Rakáin, vigente desde finales de 2020, parece cada vez más inestable.

### **A. Ataques contra la población civil**

12. Los ataques del ejército de Myanmar contra la población civil se han intensificado considerablemente en los últimos seis meses. El Proyecto de Datos de Localización y Eventos de Conflictos Armados, que reúne los informes de los medios de comunicación y de las ONG,

registró 1.143 ataques contra civiles, 81 ataques aéreos y 256 ataques con artillería pesada entre el 1 de septiembre de 2021 y el 25 de febrero de 2022<sup>2</sup>. Solo en la región de Sagaing se registraron 470 ataques de este tipo durante ese período, frente a los 213 de los siete meses siguientes al golpe y los 3 del año anterior a este. Las cifras reales pueden ser mayores. Véase en el anexo I un mapa que muestra los ataques violentos en todo el país desde el golpe de Estado.

13. Los militares han utilizado aviones de combate, helicópteros, artillería pesada y armamento ligero para atacar a los civiles. Las tácticas de los militares constituyen claras violaciones del principio de distinción, un principio fundamental del derecho internacional humanitario que exige que los combatientes distingan entre objetivos civiles y militares.

14. El uso de bombardeos aéreos por el ejército contra la población civil se ha intensificado considerablemente. Actualmente se está llevando a cabo una intensa campaña de bombardeos en el estado de Kayah y en las zonas limítrofes del sur del estado de Shan, donde los militares se enfrentan a una dura resistencia de las fuerzas populares de defensa, la Fuerza de Defensa de las Nacionalidades de Karenni y el Ejército de Karenni. En lugar de circunscribir sus ataques a los combatientes de estos grupos, el ejército ha atacado a los civiles, incluidos los residentes de las ciudades más grandes de la región. Los militares también han perseguido a los civiles en su huida, lanzando ataques contra los lugares donde se refugian los desplazados internos.

15. Un karén desplazado de 26 años que trabaja para ayudar a los desplazados internos describió la situación en el estado de Kayah de la siguiente manera:

En el pasado, hemos sufrido restricciones en el transporte o en los viajes. Pero ahora están utilizando las operaciones armadas y los ataques aéreos contra nosotros en todas partes. No hay un día en que no oigamos el sonido de los helicópteros y los aviones de combate. A veces usan los ataques aéreos contra la resistencia. Pero también se usan contra los civiles y los desplazados internos. A veces, aunque no estén atacando, se ve a helicópteros sobrevolando y buscando gente. Tienen otro tipo de avión que solo utilizan para la vigilancia. Uno o dos días después de su paso, los aviones de combate vendrán a bombardear. Como el blanco de los ataques aéreos son los civiles, no nos sentimos seguros. Sentimos que todo el estado de Karenni se ha convertido en un campo de batalla. Para nosotros, los desplazados internos, es cuestión de huir de un lugar a otro. A veces huimos por los ataques aéreos, a veces por los combates<sup>3</sup>.

16. El Relator Especial habló con un karén que había perdido a dos hijas, de 15 y 12 años, mientras permanecía refugiado con otros desplazados internos el 17 de enero de 2022. El hombre explicó:

Alrededor de la 1.00 horas, el campamento fue bombardeado. Mis dos hijas estaban entre las víctimas. Eran hermanas. No estoy seguro de si fue la metralla o la propia bomba la que cayó entre mis hijas. Las dos fueron lanzadas en direcciones diferentes. El estómago y la parte inferior del cuerpo quedaron hechos pedazos<sup>4</sup>.

17. Además, describió la grave situación en la que se encuentran los desplazados, afirmando que la continuación de los ataques a los emplazamientos de los desplazados internos ha provocado la huida de los aldeanos a zonas más adentradas de los bosques. Miles de personas en su zona luchaban por encontrar comida y agua. Concluyó diciendo: “Nos gustaría que las Naciones Unidas conocieran la verdadera situación del estado de Karenni<sup>5</sup> y

<sup>2</sup> Armed Conflict Location and Event Data Project, Data Export Tool, disponible en <https://acleddata.com/data-export-tool/> (consultado el 3 de marzo de 2022). Los datos de Myanmar se filtraron para el tipo de suceso “Ataque” dentro del tipo “Violencia contra civiles” y los tipos de suceso “Ataque aéreo/con drones” y “Bombardeo/artillería/ataque con misiles” dentro del tipo de evento “Explosiones/violencia a distancia”. El Relator Especial utiliza los datos del Proyecto como representativos de la intensidad de los combates y no puede dar fe de su exactitud absoluta.

<sup>3</sup> Entrevista con el Proyecto de Derechos Humanos de Myanmar, Centro Schell de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Yale, 11 de marzo de 2022.

<sup>4</sup> Entrevista con el Relator Especial, 19 de enero de 2022.

<sup>5</sup> También conocido como estado de Kayah.

de Myanmar. Los derechos humanos en nuestro país están siendo vulnerados. ¿Puede ayudarnos de alguna manera a conseguir una justicia y libertad verdaderas?”.

18. El Relator Especial examinó los informes sobre los ataques en la zona de Lay Kay Kaw, un pueblo cercano a la frontera entre Tailandia y Myanmar en el estado de Kayín. Desde diciembre de 2021, el ejército viene atacando indiscriminadamente la zona con artillería pesada, aviones de combate y helicópteros, lo que ha causado víctimas civiles y la huida de la zona de unas 10.000 personas, miles de las cuales han cruzado la frontera con Tailandia. Según los informes, el ejército ha bombardeado lugares donde se refugiaban desplazados internos.

19. En un testimonio de primera mano dado al Relator Especial por el Grupo de Derechos Humanos de Karen, una joven desplazada interna de 17 años de la zona de Lay Kay Kaw describió los ataques casi constantes de la junta en diciembre de 2021: “El CAE<sup>6</sup> lanza morteros, así que teníamos miedo de quedarnos. [...] Llevamos cinco días huyendo y cada día dormimos en un lugar diferente. [...] Cuando los combates se producen en el lugar a donde huimos, tenemos que huir a otro lugar”<sup>7</sup>. Un jornalero de 51 años y padre de cuatro hijos dijo: “Durante los ataques aéreos, el CAE lanzó bombas y disparó ametralladoras [desde helicópteros y aviones], por lo que las balas [y las bombas] cayeron del cielo como si fuera lluvia. Ya no nos sentíamos seguros para quedarnos y tuvimos que huir”<sup>8</sup>.

## B. Desplazamiento forzado

20. Los implacables ataques de la junta contra la población civil y las violaciones flagrantes de los derechos humanos han contribuido al desplazamiento generalizado, agravando la crisis humanitaria. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al 28 de febrero de 2022 había 873.000 desplazados internos en Myanmar<sup>9</sup>. Unas 503.000 personas han sido desplazadas desde el golpe, y 235.000 desde el 1 de diciembre de 2021. Se trata de un aumento espectacular de los desplazamientos en un país que ya viene sufriendo muchos conflictos prolongados.

21. Los intensos combates en el estado de Kayah, junto con los ataques aéreos del ejército contra ciudades y otras localidades civiles, han provocado nuevos desplazamientos masivos. Informes recientes indican que más de la mitad de los 300.000 habitantes del estado de Kayah han sido desplazados a causa de los persistentes ataques e incursiones aéreas de los militares<sup>10</sup>, incluido el 80 % de la población de Loikaw, la capital del estado de Kayah<sup>11</sup>. Más de 170.000 personas han sido desplazadas en la región de Sagaing desde el golpe<sup>12</sup>.

22. Aunque muchos desplazados internos en situaciones de desplazamiento prolongado residen en campamentos de desplazados internos con infraestructuras rudimentarias, muchos de los nuevos desplazados se refugian en zonas boscosas u otros escondites con solo los suministros que pueden llevar al huir de sus hogares. A menudo carecen de acceso a alimentos, agua potable, saneamiento y suministros médicos.

## C. Destrucción de bienes civiles

23. Después de la huida de civiles de sus hogares a causa de los ataques aéreos y los bombardeos militares, los soldados y las milicias partidarias de la junta suelen destruir casas,

<sup>6</sup> Consejo de Administración del Estado.

<sup>7</sup> Entrevista del Relator Especial con el Grupo de Derechos Humanos de Karen.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “Myanmar emergency update”, 7 de marzo de 2022.

<sup>10</sup> Véase, por ejemplo, Karenni Human Rights Group y Network for Human Rights Documentation-Burma, “The world must know”, documento informativo, febrero de 2022. Informes más recientes de ONG sobre el terreno en el estado de Kayah indican que el total de la población desplazada puede haber alcanzado los 200.000 habitantes.

<sup>11</sup> ACNUR, “Myanmar emergency overview map”, 17 de enero de 2022.

<sup>12</sup> ACNUR, “Myanmar emergency update”, 7 de marzo de 2022.

iglesias, escuelas y otras estructuras civiles. Al parecer, los militares están recurriendo a los incendios provocados y a la destrucción de bienes civiles de forma generalizada y sistemática, saqueando e incendiando aldeas y grandes sectores de ciudades en varias partes del país. Según Data for Myanmar, hasta el 7 de marzo de 2022, los militares y sus aliados incendiaron más de 6.700 estructuras civiles desde el golpe<sup>13</sup>. De ese total, más de 4.500 han sido destruidas desde principios de año.

24. En septiembre de 2021, tras un ataque en el estado de Chin que dejó un presunto saldo de decenas de soldados de Myanmar muertos, el ejército bombardeó zonas civiles e incendió viviendas en la ciudad de Thantlang. Desde entonces, las fuerzas de la junta han quemado cientos de casas y estructuras civiles en Thantlang. Las imágenes por satélite y las imágenes de los drones muestran la magnitud de la destrucción y corroboran el testimonio de los testigos que apuntan a los militares como responsables de esos actos<sup>14</sup>. Documentos militares filtrados que autorizan las operaciones para “limpiar” la zona parecen indicar la existencia de una campaña planificada de incendios provocados. Los documentos describen una “operación especial de limpieza” en el estado de Chin que comenzó en octubre de 2021 y durante la cual se autorizó a los soldados a utilizar tácticas de “zona cero”<sup>15</sup>. Casi toda la población civil de Thantlang ha sido desplazada. Los soldados también han quemado varios pueblos cercanos.

25. Desde finales de enero de 2022, los militares han llevado a cabo una campaña masiva y coordinada de incendios provocados en la región de Sagaing con el objetivo aparente de acabar con la resistencia de las fuerzas populares de defensa y de otros grupos armados antigolpistas de la región. Según los informes, se quemaron más de 1.000 edificios en varias aldeas en el lapso de solo cinco días.

26. Los militares también han quemado casas durante sus recientes ataques en el estado de Kayah. A principios de marzo de 2022, un karén cuya casa en el municipio de Demoso había sido incendiada dos días antes describió la situación en su zona mientras huía de nuevos ataques:

Mi aldea fue quemada por la junta. Ya no queda nadie ahí. Todas las aldeas de mi zona son iguales. En algunas de ellas, solo quemaron tres o cuatro casas y luego pasaron a la aldea siguiente. En otras aldeas, quemaron todas las casas. Si veían a algún aldeano, le disparaban o lo quemaban vivo. Los aldeanos están muy aterrorizados<sup>16</sup>.

## D. Ejecuciones de civiles

27. Las estimaciones de las muertes a manos de las fuerzas militares o partidarias de la junta varían mucho, lo que refleja las diferencias metodológicas, la dificultad de registrar las muertes en todo el país y la magnitud de las atrocidades cometidas por la junta. Es probable que las muertes de civiles sean al menos 1.600 y podrían ser muchas más<sup>17</sup>. El Relator Especial aborda por separado los asesinatos como resultado de la tortura en el párrafo 57.

28. Además de las víctimas mortales asociadas a los ataques indiscriminados, el ejército ha ejecutado repetidamente a personas bajo su custodia, a veces en el marco de asesinatos

<sup>13</sup> Data for Myanmar, publicación en Facebook de 9 de marzo de 2022, disponible en [www.facebook.com/data4myanmar/posts/1571395406561992](https://www.facebook.com/data4myanmar/posts/1571395406561992).

<sup>14</sup> Véase, por ejemplo, Carolina Jordá Álvarez, “A month of fires in Thantlang, Myanmar: satellite imagery, thermal anomalies data show numerous burnings”, Human Rights Watch, 30 de noviembre de 2021.

<sup>15</sup> Meg Kelly, Shibani Mahtani y Joyce Sohyun Lee, “‘Burn it all down’: how Myanmar’s military razed villages to crush a growing resistance”, *Washington Post*, 23 de diciembre de 2021.

<sup>16</sup> Entrevista con el Proyecto de Derechos Humanos de Myanmar, Centro Schell de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Yale, 5 de marzo de 2022.

<sup>17</sup> Véase, por ejemplo: Asociación de Ayuda a los Presos Políticos – Birmania, “Daily briefing in relation to the military coup”, 11 de marzo de 2022 (donde se informa de 1.652 muertes a manos de las fuerzas de la junta); y ALTSEAN Birmania, “Coups watch special edition: a year of struggle in Burma”, 9 de febrero de 2022 (“2.610 civiles... muertos como resultado de la violencia relacionada con el golpe”).

masivos de civiles detenidos. El 24 de diciembre de 2021, al menos 35 civiles fueron masacrados por soldados en el municipio de Hpruso, estado de Kayah<sup>18</sup>. Entre las víctimas había mujeres, al menos un niño y dos trabajadores humanitarios afiliados a la organización Save the Children. Los cuerpos de muchas víctimas habían sido quemados hasta quedar irreconocibles. Al parecer, algunas de las víctimas tenían las manos atadas antes de ser asesinadas. El personal militar y los grupos partidarios de la junta han quemado sistemáticamente los cuerpos de las víctimas, aparentemente en un intento de ocultar las pruebas o de sembrar el terror entre la población local.

29. El Relator Especial habló con la madre de un muchacho de 15 años que fue uno de los asesinados el 24 de diciembre de 2021. Dijo al Relator Especial que su hijo iba en un camión y ayudaba a hacer un reparto de gas para ganar dinero el día en que los soldados lo asesinaron:

Aquella mañana temprano contestó a mi llamada telefónica, pero después no pude comunicarme más con él. No sabía lo que le había pasado a mi hijo. Más tarde se informó de los asesinatos en las noticias y la gente me contó lo sucedido. [...] No me devolvieron el cuerpo. No me atreví a ir allí. Solo pregunté a la mujer del conductor [con el que iba] y me dijo que había visto la ropa de mi hijo. [...] Por la mañana, se fue sin saber que lo matarían. No sé por qué mataron a mi hijo y a los demás. [...] Odiamos el acto brutal de matar gente. Sentimos mucho dolor. A veces lloramos mientras comemos porque echamos mucho de menos a nuestro hijo<sup>19</sup>.

30. El Relator Especial habló con un joven activista que huyó de Rangún después de ser agredido durante las protestas pacíficas y de que la policía emitiera una orden de detención contra él. El activista se encuentra ahora escondido en la región de Sagaing y recuerda haber huido con frecuencia de los ataques militares, incluso de los helicópteros que disparaban ametralladoras contra las aldeas donde se escondía. Solo unos días antes de que hablara con el Relator Especial, huyó de una aldea que estaba siendo atacada por los militares y, a su regreso, él y otros aldeanos descubrieron nueve cuerpos gravemente quemados. Dijo al Relator Especial:

Cuando los militares entraron en el pueblo, huimos de él por nuestra seguridad. [Más tarde] volvimos y vimos nueve cuerpos. Revisamos los cuerpos. Vimos que los militares les habían disparado en la cabeza. Vimos que sus cerebros se filtraban por la parte posterior de la cabeza<sup>20</sup>.

31. Los grupos de la oposición también han llevado a cabo ejecuciones selectivas de no combatientes, incluidos agentes de policía, funcionarios nombrados por la junta y presuntos informadores. El Relator Especial reitera que las ejecuciones de no combatientes o de personas puestas fuera de combate —incluidos los combatientes heridos o recluidos— vulneran el derecho a la vida, independientemente de la afiliación política y militar de las víctimas.

## **E. Trabajo forzoso y utilización de civiles como escudos humanos**

32. El Relator Especial está preocupado por que la escalada del conflicto armado y los desplazamientos en todo el país vayan acompañados de un aumento del trabajo forzoso, que repite un cuadro ya observado en ciclos anteriores de violencia y disturbios durante varios decenios. Pasó revista a los relatos de primera mano sobre el trabajo forzoso recogidos por las ONG, incluidas las descripciones de casos que implican hasta 100 víctimas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó que su vigilancia del trabajo forzoso se había visto interrumpida por el golpe, pero que las organizaciones comunitarias habían

<sup>18</sup> Véase Naciones Unidas, “Comunicado de prensa del Consejo de Seguridad sobre la situación en Myanmar”, 29 de diciembre de 2021; y Fortify Rights, “Ongoing war crimes in Karenni (Kayah) State, Myanmar: May 2021 to January 2022”, febrero de 2022, págs. 16 a 21.

<sup>19</sup> Entrevista con el Proyecto de Derechos Humanos de Myanmar, Centro Schell de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Yale, 11 de marzo de 2022.

<sup>20</sup> Entrevista con el Relator Especial, 6 de marzo de 2022.

informado de un aumento del trabajo forzoso impuesto por los militares. Al parecer, también se ha ejecutado a algunas víctimas de trabajo forzoso.

33. Los grupos de derechos humanos y los medios de comunicación han informado del uso por parte del ejército de civiles como escudos humanos, también durante los tiroteos con grupos armados de la oposición. Algunas de las personas utilizadas como escudos humanos en las zonas de conflicto han sido menores de edad, según información creíble comunicada al Relator Especial.

34. El Relator Especial está preocupado por los informes sobre el reclutamiento forzoso, también de menores de edad, por el ejército de Myanmar. Dada la proliferación de frentes de conflicto en Myanmar y el análisis del personal militar, las deserciones y las presiones de reclutamiento, preocupa al Relator Especial que los militares vuelvan a utilizar de forma generalizada el reclutamiento forzoso y de menores de edad.

### III. Emergencia humanitaria

35. La junta es directamente responsable del rápido deterioro de la situación humanitaria en Myanmar, que amenaza los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, incluidos los derechos a la alimentación, la vivienda, la salud y un nivel de vida adecuado. La obstrucción de la ayuda humanitaria por parte de la junta y los ataques a los trabajadores humanitarios en el contexto del conflicto armado que se describen a continuación violan el derecho internacional humanitario<sup>21</sup>.

36. La junta militar ha llevado a Myanmar a una catástrofe humanitaria caracterizada por el desmoronamiento de la infraestructura sanitaria, la caída de la mitad de la nación en la pobreza, la inflación galopante, el aumento del precio del combustible, la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la obstrucción de la entrega de ayuda. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios estima que es necesario cuadruplicar la financiación de la comunidad de donantes para cumplir los objetivos de asistencia humanitaria en Myanmar, y se necesita más apoyo para las poblaciones de refugiados en Bangladesh y Tailandia. Aun si se cumplen esos objetivos, millones de personas que necesitan ayuda se quedarán sin ella. Preocupa profundamente al Relator Especial que, sin una acción más enérgica por parte de la comunidad internacional, la situación de esas personas se verá considerablemente agravada, lo que dará lugar a un número incalculable de muertes y sufrimiento a escala masiva.

37. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que las interrupciones de los servicios sanitarios, si no se corrigen, provocarán 47.156 muertes adicionales evitables en 2022<sup>22</sup>. A finales del año pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo predijo que casi la mitad de la población de Myanmar caería en la pobreza a principios de 2022 y que la pobreza urbana se triplicaría debido a la pandemia y a la crisis política que se está desencadenando<sup>23</sup>. Más de 13 millones de personas se enfrentan actualmente a una inseguridad alimentaria moderada o grave<sup>24</sup>. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios calcula que 14,4 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en 2022<sup>25</sup>.

38. La falta de confianza en la junta sigue socavando los programas de salud pública, incluida la respuesta a la pandemia de COVID-19. La tasa de vacunación en Myanmar es la más baja entre los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), y las

<sup>21</sup> Comité Internacional de la Cruz Roja, “Norma 55. Libre paso de la ayuda humanitaria destinada a las personas civiles necesitadas”, Base de datos sobre DIH consuetudinario. Puede consultarse en: [https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1\\_rul\\_rule55](https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/spa/docs/v1_rul_rule55).

<sup>22</sup> Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Humanitarian Needs Overview: Myanmar”, diciembre de 2021, pág. 34.

<sup>23</sup> Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Myanmar urban poverty rates set to triple, new United Nations survey finds”, 1 de diciembre de 2021.

<sup>24</sup> Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Humanitarian response plan: Myanmar”, enero de 2022, pág. 10.

<sup>25</sup> *Ibid.*, pág. 20.

pruebas de COVID-19 son difíciles de conseguir, lo que hace que la población sea extremadamente susceptible a futuras oleadas de contagios y crea un entorno que podría dar lugar a nuevas variantes<sup>26</sup>.

### **Obstrucción de la entrega de ayuda humanitaria**

39. La junta ha respondido a la creciente crisis de Myanmar utilizando la ayuda humanitaria que tanto se necesita como arma. El Relator Especial recibió informes creíbles de que las autoridades de la junta han ordenado expresamente a los líderes de las aldeas que no acepten ayuda de ONG internacionales sin autorización previa. Los agentes humanitarios han tenido que enfrentarse a múltiples puestos de control a lo largo de las rutas de transporte, y se ha sometido a los trabajadores a registros invasivos, incluso de sus dispositivos móviles. Las autoridades confiscan o destruyen regularmente alimentos, medicinas, ropa y otros bienes.

40. Las preocupaciones de las organizaciones humanitarias por la seguridad de su personal también ha afectado a la entrega de la ayuda. Con frecuencia, se ha detenido o encarcelado a miembros del personal de las ONG internacionales. Los representantes de las organizaciones locales que desempeñan un papel fundamental en la entrega de la ayuda corren un riesgo aún mayor. Las poblaciones que necesitan ayuda con mayor urgencia suelen ser aquellas a las que las organizaciones humanitarias tienen más dificultades para llegar.

41. Las fuerzas de la junta han atacado sistemáticamente a la infraestructura y al personal sanitario. Un estudio de Physicians for Human Rights documentó 128 ataques a establecimientos sanitarios, la detención de 286 trabajadores de la salud y la ejecución de 30 trabajadores de la salud en el año siguiente al golpe<sup>27</sup>. El personal médico que atiende a los grupos armados de la oposición corre graves riesgos, como la amenaza de detención, reclusión, tortura y violencia sexual. En noviembre de 2021, nueve auxiliares sanitarias, algunas de ellas adolescentes, fueron detenidas por soldados durante una incursión en un campamento de las fuerzas populares de defensa en el municipio de Kalay, en la región de Sagaing. Los informes indican que es probable que al menos algunas de las detenidas hayan sido torturadas durante su privación de libertad.

42. Los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias han advertido que la imposición de obstáculos burocráticos por parte de la junta ha retrasado o impedido la entrega de la ayuda<sup>28</sup>. Las organizaciones han experimentado grandes retrasos en la autorización de viajes o en la aprobación de memorandos de entendimiento. La junta también ha utilizado la pandemia de COVID-19 como pretexto para imponer restricciones de viaje que obstaculizan el acceso a los desplazados internos.

## **IV. La persecución de la junta a sus opositores**

43. La supresión de la oposición y la disidencia por la junta vulnera numerosos derechos humanos, como los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, a la vida, a un juicio imparcial y a no ser detenido arbitrariamente ni torturado. Estas acciones contribuyen a los continuos ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil y, por lo tanto, es probable que constituyan crímenes de lesa humanidad, incluidos los crímenes

<sup>26</sup> Hasta el 26 de febrero se habían administrado 45.202.278 dosis de vacunas, suficientes para administrar dos dosis a aproximadamente el 42 % de la población. Véase Organización Mundial de la Salud, Coronavirus (COVID-19) Dashboard: Myanmar (<https://covid19.who.int/region/searo/country/mm>).

<sup>27</sup> Physicians for Human Rights, “‘Our health workers are working in fear’: after Myanmar’s military coup, one year of targeted violence against health care”, enero de 2022, pág. 13. Véase también OMS, Myanmar, 1 de septiembre de 2021-22 de febrero de 2022, base de datos del Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (<https://extranet.who.int/ssa/Index.aspx>).

<sup>28</sup> Véase, por ejemplo, Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Myanmar humanitarian update No. 15”, 15 de febrero de 2022.

de asesinato, privación de libertad, tortura, violación, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos. Debe exigirse la rendición de cuentas de los autores de esos actos.

## A. Oposición no violenta en curso

44. Dirigidos por un gran número de jóvenes, entre ellos muchas mujeres jóvenes, los organizadores de las protestas han demostrado gran habilidad, tenacidad y creatividad en la movilización de la oposición a pesar de la amenaza casi constante de encarcelamiento o muerte. Para salvar la vida de los manifestantes frente a un ejército que no tiene reparos en disparar directamente contra la multitud, los líderes de las protestas han adaptado sus tácticas. A menudo se celebran “protestas relámpago”, menos numerosas en las primeras horas de la mañana. Se han organizado “huelgas silenciosas” para que un gran número de personas pueda manifestar de forma segura. A pesar de las órdenes y amenazas de la junta militar para que el público no participe, un gran número de personas se negó a salir a la calle en pueblos y ciudades de todo el país el 10 de diciembre de 2021, Día de los Derechos Humanos, y el 1 de febrero de 2022, aniversario del intento de golpe de Estado de la junta.

45. Más de un año después del golpe, miles de funcionarios, trabajadores de la salud, profesores y abogados siguen participando en un Movimiento de Desobediencia Civil a nivel nacional, negándose a trabajar en las instituciones del Estado. Los activistas han organizado iniciativas de financiación participativa para prestar apoyo financiero a personas y familias que han renunciado a sus nóminas para demostrar su oposición al régimen militar. El Movimiento de Desobediencia Civil ha contribuido sobremanera a socavar los esfuerzos de la junta por hacerse con el control del país.

46. El Relator Especial habló con una comerciante que describió cómo se negaba a vender productos fabricados por empresas relacionadas con el ejército en un intento de privar a la junta de fondos. Dijo:

Como usted sabe, en Myanmar detienen a quienes ellos quieren. Detendrán a la madre, y si no pueden llevarse a la madre, se llevarán a los hijos. Así es. No podemos dar ningún paso. Tenemos las manos y las piernas atadas. No podemos explicar la violencia del CAE a otros países. Entonces, ¿por qué el boicot? Mientras compramos sus productos, es como si los apoyáramos, enriqueciéndolos aún más. Por eso es importante recordar que la acción de cada persona cuenta. Tenemos que actuar todos juntos. Mantendremos esta actitud. No compraremos ni venderemos sus productos<sup>29</sup>.

## B. Ataques contra manifestantes pacíficos

47. Dadas las estrategias de mitigación de riesgos adoptadas por los organizadores de las protestas, ha habido menos víctimas mortales y heridos por ataques de las fuerzas de la junta que en los meses inmediatamente posteriores al golpe. Es importante señalar que esto no supone un cambio en las tácticas de la junta, que sigue utilizando la fuerza letal contra los manifestantes pacíficos.

48. El 5 de diciembre de 2021, un camión militar que circulaba a gran velocidad embistió a un grupo de decenas de personas que participaban en un *flashmob* pacífico en el municipio de Kyimyindaing, en Rangún. Durante el ataque, las autoridades también abrieron fuego con munición real. Los medios de comunicación locales informaron de al menos 4 víctimas mortales y 15 detenciones en el lugar del atentado. El *Global New Light of Myanmar* —una publicación controlada por la junta— describió el incidente como una “operación de dispersión de multitudes” llevada a cabo “de acuerdo con el reglamento”, a pesar de que el

<sup>29</sup> Entrevista con el Relator Especial, 17 de enero de 2022.

ataque violento y no provocado contra manifestantes pacíficos fue captado por las cámaras de varios manifestantes y residentes del barrio<sup>30</sup>.

49. Un líder joven de la protesta que evitó por poco la detención el 5 de diciembre de 2021 contó al Relator Especial lo que vio:

Llegamos al lugar de la huelga, y los huelguistas y residentes de Rangún se reunieron e iniciaron la protesta. El título de la huelga era “Vivir sin temor”. Los soldados llegaron solo un minuto después de que los líderes de la protesta empezaran a gritar. Los soldados insultaron a gritos a los manifestantes. Algunos de mis amigos no vieron venir el camión militar. [...] Grité: “Viene el camión militar”. Pero no me oyerón porque la gente gritaba mucho. Continuaron con su protesta. Todavía no puedo olvidar el sonido del ataque de los militares contra la población. No puedo quitármelo de la cabeza. Algunas personas pudieron evitar el camión, pero otras no lo vieron y fueron atropelladas. Algunas personas quedaron atrapadas bajo el camión<sup>31</sup>.

50. Las autoridades han embestido con vehículos a manifestantes pacíficos en varias ocasiones durante los últimos seis meses. El 11 de septiembre de 2021, una mujer resultó muerta durante un ataque contra manifestantes que iban en moto. Según informaciones, durante una protesta en Monywa, en la región de Sagaing, llamada “Seis Dos” en conmemoración de la fecha (22/2/2022) y la continuación de las huelgas y manifestaciones masivas un año después de la protesta del 22 de febrero de 2021, una mujer embarazada sufrió un aborto tras ser derribada de una motocicleta y los soldados abrieron fuego contra dos jóvenes e hirieron y detuvieron a uno de ellos.

### C. Detención y reclusión arbitrarias

51. En los últimos seis meses, la junta ha continuado su campaña de represión de la disidencia, deteniendo y encarcelando a activistas, periodistas, manifestantes pacíficos, líderes de la sociedad civil y políticos. Según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos – Birmania, a 11 de marzo de 2022, 12.598 personas habían sido detenidas en relación con sus actividades prodemocráticas o de oposición al gobierno militar desde el golpe de Estado de 1 de febrero de 2021<sup>32</sup>. De este total, 9.588 permanecen recluidas. Las autoridades han emitido órdenes de detención contra otras 1.973 personas.

52. El Relator Especial ha seguido recibiendo informes creíbles sobre la persecución de los familiares de las personas que han logrado eludir la detención. Las autoridades han recluido a hijos o familiares mayores de personas con órdenes de detención pendientes. La Asociación de Ayuda a los Presos Políticos – Birmania ha documentado la detención de 320 personas que han sido “retenidas como rehenes”, 266 de las cuales, según los informes, seguían privadas de libertad al 7 de marzo de 2022.

### D. Tortura, otros malos tratos y muertes durante la reclusión

53. El ejército de Myanmar ha seguido empleando la tortura y los malos tratos en prisiones, comisarías, bases militares y otros lugares de reclusión. Dada la falta de acceso a las miles de personas actualmente privadas de libertad por la junta, es difícil determinar todo el alcance de las violaciones sufridas por esas personas. Sin embargo, las conversaciones directas del Relator Especial con las personas puestas en libertad, los informes de los medios de comunicación, las cartas enviadas subrepticamente por las personas recluidas y los

<sup>30</sup> “Press release on circulating misinformation about crowd dispersal of security forces in Kyimyindine Township”, *Global New Light of Myanmar*, 7 de diciembre de 2021. Al parecer, el oficial que organizó el ataque contra los manifestantes fue galardonado por su “destacada actuación bajo el régimen militar” durante una ceremonia del Día de la Independencia el 4 de enero de 2022. Véase, Irawaddy, “Yangon vehicle ramming commander honoured by Myanmar junta leader”, 6 de enero de 2022.

<sup>31</sup> Entrevista con el Relator Especial, 5 de marzo de 2022.

<sup>32</sup> Asociación de Ayuda a los Presos Políticos – Birmania, “Daily briefing in relation to the military coup”, 11 de marzo de 2022.

informes de los abogados que han estado en contacto con clientes reclusos muestran un cuadro de graves abusos que continúan a escala masiva<sup>33</sup>.

54. Los relatos de las víctimas de tortura y los testigos presenciales indican que las fuerzas de seguridad han utilizado la tortura para extraer información o confesiones durante las sesiones de interrogatorio y también han torturado a las personas reclusas como forma de castigo o represalia. Los métodos empleados incluyen puñetazos, patadas, puñaladas, golpes con palos o varas, golpes con las culatas de las pistolas, descargas con dispositivos eléctricos, quemaduras en la piel y los genitales, arrancamiento de uñas, posiciones de estrés y privación de comida y agua. Los relatos de tortura suelen incluir el uso de tácticas diseñadas para humillar a las víctimas. Muchas mujeres reclusas —y algunos hombres— han sufrido acoso sexual, agresiones sexuales o violaciones. Algunas víctimas de la tortura han sido menores de edad. Los heridos durante las sesiones de tortura o interrogatorio rara vez reciben algún tipo de tratamiento médico.

55. El Relator Especial habló con un antiguo estudiante universitario que actualmente es un organizador de protestas en Rangún. Tras ser detenido en julio de 2021, fue torturado. Dijo al Relator Especial:

Una vez, el 30 de julio de 2021, fuimos atacados por entre 30 y 40 policías y soldados. Abrieron fuego contra nosotros utilizando balas de goma y munición real. De 30 de ellos, unos 10 llevaban ropa de civil. El resto llevaba uniforme. Me detuvieron y me llevaron al centro de interrogatorios. Me torturaron y no me dieron agua. Me golpearon con una vara de bambú, pero no era una vara de bambú normal. Había un paño envuelto en ella y le echaron aceite y luego le prendieron fuego. También me acusaron porque tenía una bandera de nuestro grupo universitario. También sacaron balas y dijeron que eran mías. Pero no eran mías. Solo me acusaban<sup>34</sup>.

56. Posteriormente, el organizador de la protesta fue puesto en libertad. A pesar de su experiencia, sigue su labor como organizador de manifestaciones. Dijo al Relator Especial:

Pienso en dos cosas. En primer lugar, sé que lo que necesitamos es una democracia federal. Pero, en segundo lugar, también tengo miedo de las armas de los militares. Cuando comparo esas dos cosas, sé qué es más importante. Lo más importante es la democracia. Así que sigo sumándome a las protestas.

57. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha identificado al menos a 325 personas, entre ellas 16 niños, que han muerto durante la reclusión<sup>35</sup>.

## E. Juicios y condenas por motivos políticos

58. El estado de derecho se ha derrumbado por completo desde el golpe militar, con lo que desaparecieron las modestas mejoras realizadas durante el decenio anterior de gobierno civil<sup>36</sup>. Los “juicios” se han celebrado a puerta cerrada y dentro de las prisiones, impidiendo el acceso del público o de los medios de comunicación. Se ha condenado a personas sobre la base de confesiones extraídas mediante tortura o de pruebas “secretas” que nunca se presentan ante el tribunal. Según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos – Birmania, al menos 955 personas han sido condenadas por motivos políticos desde el golpe de Estado, incluidas más de 100 condenadas en rebeldía<sup>37</sup>.

<sup>33</sup> Véase, por ejemplo, Victoria Milko y Kristen Gelineau, “Myanmar military uses systematic torture across country”, Associated Press, 28 de octubre de 2021.

<sup>34</sup> Entrevista con el Relator Especial, 4 de marzo de 2022.

<sup>35</sup> Véase [A/HRC/49/72](#).

<sup>36</sup> Véase Comisión Internacional de Juristas, “Myanmar: a year after military takeover, no rule of law or judicial independence”, 10 de febrero de 2022.

<sup>37</sup> Asociación de Ayuda a los Presos Políticos – Birmania, “Daily briefing in relation to the military coup”, 11 de marzo de 2022.

59. En diciembre de 2021, el Presidente Win Myint y la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi fueron condenados por violar las restricciones relacionadas con la COVID-19 y por instigación en tal sentido, y en enero de 2022 Aung San Suu Kyi fue condenada por importar ilegalmente *walkie-talkies*. Aung San Suu Kyi se enfrenta a más de una docena de cargos adicionales. La junta también ha encarcelado a cientos de miembros de la Liga Nacional para la Democracia, incluidos 13 de los 14 exministros jefe regionales y estatales de la Liga. Algunos ya han sido condenados.

## V. Los derechos de las mujeres y las niñas

60. Durante más de dos decenios, Myanmar ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a la que se adhirió en 1997. Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, la junta ha sido directamente responsable de una crisis cada vez más grave de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en particular de abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

61. Debido al conflicto armado, la lucha civil y la pandemia de COVID-19, han aumentado considerablemente los riesgos a los que se enfrentan las mujeres y las niñas en todo Myanmar. Las mujeres y las niñas de las zonas de conflicto son especialmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos, como la violencia sexual, la detención arbitraria y el trabajo forzoso. El Relator Especial teme que la violencia y la inestabilidad que asolan Myanmar puedan obligar a algunas mujeres a prostituirse o a contraer matrimonio prematuramente, o hacerlas más vulnerables a la trata de personas. Las organizaciones humanitarias dijeron al Relator Especial que cada mes decenas de mujeres de los campamentos de desplazados internos eran objeto de trata, y que a veces los hombres vendían a mujeres de su propia familia a los tratantes.

### Violencia de género

62. El Relator Especial está gravemente preocupado por los informes sobre acoso sexual, agresiones sexuales y violaciones en los centros de reclusión y las zonas de conflicto en Myanmar. Durante decenios, el ejército de Myanmar ha utilizado la violencia sexual y otros delitos contra las mujeres como arma de guerra. Con arreglo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la violación y la violencia sexual son crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, según el contexto en que se cometen.

63. Según la Liga de Mujeres de Birmania, los casos de violación, violencia de género, acoso sexual y abusos sexuales de niñas han aumentado considerablemente desde el golpe de Estado. La Secretaria General de la Liga, Naw Hser Hser, informó al Relator Especial sobre los casos que su organización había documentado en los últimos meses, entre ellos la violación de una mujer de 62 años y de una madre primeriza. Expresó la frustración de las mujeres que viven con miedo en un sistema en que los que cometen violencia sexual pueden hacerlo con impunidad:

La junta militar ha utilizado siempre la violencia sexual como estrategia, incluso antes del golpe. Si el conflicto ocurre en el estado de Karenni, hay mujeres violadas. Si hay un ataque contra los rohinyás, hay mujeres violadas. [...] No hay sistema judicial desde el golpe militar. No podemos ir a ningún tribunal. Solo esperamos que la comunidad internacional pueda ayudar con la protección. Esperamos que puedan ayudar a llevar el caso a la Corte Penal Internacional. [...] Todos estos son crímenes que se cometen desde hace muchos años. Es necesario que los responsables rindan cuentas de sus actos<sup>38</sup>.

64. Una joven activista que estuvo recluida en la prisión de Insein durante ocho meses tras ser detenida en una protesta pacífica en marzo de 2021 contó al Relator Especial cómo fue golpeada durante las sesiones de interrogatorio y cómo compartió una habitación

<sup>38</sup> Entrevista con el Relator Especial, 3 de marzo de 2022.

abarrota y un único baño con más de 100 reclusas. Habló de su experiencia y del acoso sexual y la violencia de género que son sumamente comunes en los centros de reclusión. También describió las agresiones sexuales a otras mujeres y a personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales privadas de libertad que pudieron haber sido agredidas por su orientación sexual.

65. Aparte de la violencia sexual infligida por los militares, las llamadas a las líneas directas de violencia de género se han duplicado o triplicado en los últimos dos años. El Relator Especial está profundamente preocupado por el hecho de que la pandemia de COVID-19, las perturbaciones económicas y la alteración de las rutinas diarias tras el golpe de Estado hayan creado las condiciones para una intensificación de la violencia de género en la esfera privada. El colapso de las funciones gubernamentales y la desconfianza generalizada en las autoridades han limitado gravemente las vías de reparación o asistencia a las que pueden recurrir las víctimas.

66. Las organizaciones que atienden a las víctimas de la violencia de género se han visto muy afectadas por el entorno operativo seriamente restringido que se describe en el presente informe. La falta de acceso a los fondos para estas organizaciones coincide con el aumento de los costos incurridos por las víctimas debido al traslado de muchos servicios relacionados con la salud a clínicas privadas. Muchas mujeres rechazan los servicios de cuidado de la salud cuando son remitidas a los hospitales militares.

## VI. Derechos del niño

67. Las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos por parte de la junta, el colapso de los servicios públicos tras el golpe de Estado y la pandemia de COVID-19 han tenido efectos devastadores en los niños de Myanmar. Los ataques indiscriminados de la junta contra la población civil no solo han incluido a menudo a niños víctimas, sino que en ocasiones los niños han sido el blanco específico de la violencia y las violaciones de derechos humanos de la junta. Además, la crisis de la salud y la educación públicas han amenazado la vida y el bienestar de los niños y tendrán un impacto a largo plazo en su desarrollo. El trato que la junta da a los niños infringe las obligaciones de Myanmar en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que se adhirió en 1991, y puede constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

68. Según los informes de las ONG y los organismos de las Naciones Unidas, más de 100 niños han resultado muertos a manos de las fuerzas de la junta desde el golpe de Estado<sup>39</sup>. Estas muertes han sido el resultado de ataques contra manifestantes pacíficos, ataques aéreos y de artillería indiscriminados, ejecuciones y el uso de niños como escudos humanos. Al parecer, 4 niños se encontraban entre las víctimas de la matanza de al menos 35 personas perpetrada el 24 de diciembre de 2021 en el municipio de Hpruso, en el estado de Kayah<sup>40</sup>. El 7 de diciembre de 2021 se produjo una espantosa matanza de 11 personas en el municipio de Salingyi, en la región de Sagaing, en la que, al parecer, había 5 adolescentes. Muchos niños también se ven afectados por las minas terrestres. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) registró 19 muertes y 55 heridas de niños por minas terrestres en 2021<sup>41</sup>.

69. Según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos – Birmania, a 11 de marzo de 2022 había 188 niños recluidos como presos políticos, muchos de ellos por su participación en protestas pacíficas<sup>42</sup>. De los que actualmente son rehenes en esas circunstancias, 25 son menores de edad<sup>43</sup>. Muchos de estos niños han sido privados de libertad por su relación con personas que han eludido la detención. A menudo se ha denegado

<sup>39</sup> Véase Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “Myanmar Country Office, Humanitarian situation report”, 1 de enero a 31 de diciembre de 2021.

<sup>40</sup> UNICEF, “UNICEF condemns reported killing of at least 35 people, including four children and two humanitarian workers, in Kayah State, Myanmar”, 28 de diciembre de 2021.

<sup>41</sup> UNICEF, “Landmines/ERW incidents information”, enero a diciembre de 2021.

<sup>42</sup> Asociación de Ayuda a los Presos Políticos – Birmania, “Under detention list”, 11 de marzo de 2022.

<sup>43</sup> Asociación de Ayuda a los Presos Políticos – Birmania, “Hostage list”, 7 de marzo de 2022.

a los niños el acceso a abogados y familiares. Algunos han sido torturados y se les ha privado de atención médica por sus lesiones.

70. El Relator Especial está sumamente preocupado por el reclutamiento de niños como soldados y la utilización de niños como escudos humanos. La OIT ha observado un aumento del reclutamiento forzoso de jóvenes por grupos leales al ejército de Myanmar<sup>44</sup>. Al parecer, algunos han sido ejecutados mientras cumplían un servicio militar obligatorio. El Relator Especial está preocupado por los informes que indican que los hijos de los militares de 15 años o más han sido obligados a recibir formación militar. También examinó los informes relativos al reclutamiento de jóvenes adolescentes por grupos étnicos armados.

71. El efecto combinado de la pandemia de COVID-19 y el golpe militar han perturbado masivamente la educación en Myanmar. En mayo de 2021, aproximadamente 12 millones de niños habían perdido más de un año de escolarización a causa de la pandemia de COVID-19<sup>45</sup>. Sin embargo, tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia a finales de 2021, muchos profesores se mantuvieron alejados de las aulas como parte del Movimiento de Desobediencia Civil, y muchas familias tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a las escuelas públicas<sup>46</sup>. El conflicto armado, los desplazamientos y otros problemas de seguridad también han obstaculizado el acceso a la educación. Se estima que la tasa de asistencia a las escuelas públicas es inferior al 50 %<sup>47</sup>.

72. Las fuerzas de la junta también han ocupado y atacado escuelas en las zonas de conflicto, causando más interrupciones en la educación y amenazando la vida de estudiantes y profesores. Según información creíble comunicada al Relator Especial, en 2021 se produjeron más de 200 ataques contra escuelas y personal escolar. Las fuerzas de la junta también han ocupado escuelas. En febrero de 2022, según los informes, los soldados mantuvieron como rehenes a 80 escolares durante dos días en el municipio de Yinmabin, en la región de Sagaing.

73. El colapso de los servicios sanitarios también ha tenido un gran impacto en los niños. Es probable que la interrupción de la inmunización sistemática de los niños tenga efectos a largo plazo en la salud pública de Myanmar. Casi 1 millón de niños no ha recibido las dosis regulares de vacunas desde el golpe de Estado. La OMS calcula que la falta de inmunización sistemática podría provocar 33.000 muertes<sup>48</sup>.

## VII. Libertad de expresión, de reunión y de asociación

74. Tras el golpe, la junta ha reprimido enérgicamente las libertades fundamentales, modificando el código legal para limitar la expresión, restringiendo severamente el acceso a Internet y reprimiendo a la sociedad civil. Estas medidas vulneran los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación.

### A. Libertad de los medios de comunicación

75. La junta ha sido implacable en sus ataques contra los periodistas, sin duda consciente de que la información veraz e independiente amenaza sus propios relatos falsos. Según el

<sup>44</sup> Organización Internacional del Trabajo, Consejo de Administración, “Seguimiento de las resoluciones relativas a Myanmar adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en sus 102ª (2013) y 109ª (2021) reuniones”, GB.344/INS/12, 25 de febrero de 2022.

<sup>45</sup> Save the Children, UNICEF y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “Education at risk: a generation of children in Myanmar must have safe, appropriate and inclusive opportunities to continue their learning”, declaración conjunta, 20 de mayo de 2021.

<sup>46</sup> UNICEF, “Myanmar Country Office, Humanitarian situation report”, 1 de enero a 31 de diciembre de 2021.

<sup>47</sup> UNICEF, “Myanmar Country Office, Humanitarian situation report No. 9”, 29 de noviembre a 30 de diciembre de 2021.

<sup>48</sup> Naciones Unidas, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Humanitarian Needs Overview: Myanmar”, diciembre de 2021, pág. 34.

Comité para la Protección de los Periodistas, en 2021 Myanmar se convirtió en el segundo país del mundo con peores condiciones de encarcelamiento de periodistas<sup>49</sup>. Desde el golpe de Estado, las autoridades han detenido a más de 100 periodistas, de los que decenas permanecen entre rejas. Se ha dado muerte al menos a 3 periodistas, y algunos han sido torturados.

76. El 1 de noviembre de 2021, la junta modificó de forma draconiana la Ley de Radio y Televisión, codificando su control sobre los medios de difusión. La Ley, que se aprobó por primera vez en 2015, ya autorizaba un control gubernamental inadecuado sobre los medios de difusión. Las nuevas modificaciones de la junta sustituyeron las multas por infracciones de la ley —incluido el incumplimiento de las órdenes de censura— por sanciones penales muy desproporcionadas de hasta cinco años de prisión<sup>50</sup>. Las modificaciones ampliaron el alcance de la Ley para abarcar “otras tecnologías” que permiten recibir programas de radio o televisión, lo que probablemente implique el uso de las redes sociales y otras plataformas en línea para compartir archivos de audio o vídeo.

77. Frente a estos inmensos desafíos, muchos periodistas profesionales y ciudadanos han asumido grandes riesgos personales para informar sobre el conflicto armado y las violaciones de los derechos humanos por la junta. A menudo han adoptado nuevas metodologías: operar en la clandestinidad, informar de forma anónima o bajo seudónimos y utilizar redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) o tecnología de cifrado.

## B. Restricciones de Internet

78. Tras el golpe de Estado de febrero de 2021, la junta bloqueó el acceso a los medios sociales y a las plataformas de mensajería e impuso apagones de Internet en todo el país. Desde mediados de 2021, las autoridades se han abstenido en gran medida de realizar cortes de Internet en todo el país y, en su lugar, han impuesto cortes locales en zonas de conflicto y áreas donde las fuerzas de la oposición son sólidas. Los medios sociales y las plataformas de mensajería siguen bloqueados en todo el país y solo se puede acceder a ellas mediante VPN. Sin embargo, las autoridades han comenzado a registrar los teléfonos en los puestos de control y en los registros domiciliarios, y quienes tienen instaladas redes VPN son detenidos.

79. La junta ha comenzado a establecer lo que puede describirse como una dictadura digital. Un proyecto de ley de ciberseguridad prohibiría el uso de VPN, cuyos usuarios se enfrentarían a penas de hasta tres años de prisión, y facultaría a las autoridades a bloquear contenidos en línea o restringir el acceso a Internet sin supervisión judicial. Las penas incluyen hasta tres años de prisión por “crear información errónea y desinformación con la intención de causar pánico al público, pérdida de confianza o división social”<sup>51</sup>. Otras disposiciones erosionan la privacidad en línea y aumentan el riesgo de vigilancia invasiva y de detenciones y encarcelamientos arbitrarios.

## C. Vigilancia

80. En los últimos meses, la junta ha tomado medidas para aumentar su capacidad de vigilancia de las comunicaciones hasta nuevos y peligrosos niveles, afectando significativamente al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.

81. En septiembre de 2021, Telenor —una empresa noruega que es uno de los cuatro principales proveedores de telecomunicaciones de Myanmar— reveló que las autoridades le habían exigido que activara la tecnología de vigilancia en sus redes. Telenor declaró que no

<sup>49</sup> Comité para la Protección de los Periodistas, “Number of journalists behind bars reaches global high”, 9 de diciembre de 2021.

<sup>50</sup> “Republic of the Union of Myanmar, State Administration Council, Second Amendment Law to the Television and Radio Broadcasting Law, State Administration Council Law No. 63/2021”, en *Global New Light of Myanmar*, vol. VIII, núm. 197 (2 de noviembre de 2021).

<sup>51</sup> Access Now, “Analysis: the Myanmar junta’s Cybersecurity Law would be a disaster for human rights”, 27 de enero de 2022.

cumpliría la orden voluntariamente, y el 16 de febrero de 2022 indicó en su sitio web que no había activado la tecnología en su red de Myanmar.

82. Más tarde se informó de que Telenor había accedido a las solicitudes de datos del Gobierno, lo que afectaba a miles de clientes. Telenor ha sido de lejos la empresa de telecomunicaciones más transparente de Myanmar, y parece muy probable que los demás proveedores hayan cumplido las órdenes gubernamentales tanto de proporcionar datos como de activar la tecnología de vigilancia.

83. La salida prevista de Telenor de Myanmar sigue suscitando dudas sobre el traspaso de los datos correspondientes a 18 millones de clientes conectados a Telenor en ese país. A principios de 2021, se informó de que Telenor Myanmar sería vendida a una empresa conjunta del Grupo M1 y el Grupo Shwe Byain Phyu, una compañía de Myanmar con vínculos comerciales con los militares<sup>52</sup>. Los activistas que compraron una tarjeta SIM de Telenor por la adhesión de la empresa a la transparencia y los derechos humanos temen ahora que los militares obtengan un acceso ilimitado a los datos de sus llamadas, amenazando su seguridad y la de sus familias, colegas y otros contactos.

84. Un activista que huyó del país en 2021 dijo al Relator Especial:

Me siento muy inseguro. Los datos que Telenor transfiera se pueden buscar con un programa informático. Entonces conocerán a todas las personas con las que he estado conectado. Puedo esconderme, pero hay gente que no puede esconderse: mi madre, mi hermano, mis amigos. [...] Nadie está a salvo. Aun si estamos escondidos, nadie está a salvo ahora mismo. [Telenor] dice que está cumpliendo la ley. No hay ninguna ley con los militares terroristas. Incluso detienen a la gente solo porque están aplaudiendo. ¿Dónde está la ley?<sup>53</sup>

## VIII. Los derechos humanos de los rohinyás

85. Los aproximadamente 600.000 rohinyás del estado de Rakáin siguen siendo víctimas de la vulneración sistemática de sus derechos humanos<sup>54</sup>. Más de 130.000 permanecen confinados en campamentos de desplazados internos e incluso los que viven en aldeas se ven privados de su derecho a circular libremente. La mayoría de los aldeanos tiene que solicitar permiso para viajar entre localidades del estado de Rakáin, conforme a un sistema aplicado en los puestos de control atendidos por las fuerzas de seguridad en toda la región. Desde el golpe de Estado, los rohinyás se han enfrentado a nuevas detenciones por viajes indocumentados y, a mediados de 2021, 67 rohinyás estaban siendo juzgados y 58 habían sido condenados a penas de hasta dos años por viajar fuera del estado de Rakáin. Las restricciones de viaje y los toques de queda nocturnos pueden tener consecuencias de vida o muerte, especialmente para quienes necesitan tratamiento para enfermedades agudas. Un brote de diarrea en los campamentos de desplazados internos rohinyás que comenzó en enero de 2022 ha provocado muertes que podrían haberse evitado con un tratamiento médico oportuno.

86. Los rohinyás siguen sin poder acceder a la ciudadanía en Myanmar. Pocos de ellos son capaces de superar los obstáculos en relación con los documentos exigidos por la Ley de Ciudadanía de 1982, que se aplica de forma extremadamente discriminatoria contra ellos. En general, los rohinyás no están dispuestos a aceptar las Tarjetas de Verificación Nacional debido a la estipulación de que se registren como “bengalíes”, lo que los identifica como extranjeros.

87. No se ha avanzado en el retorno seguro, digno y voluntario de los rohinyás expulsados de sus hogares. Muchas de las propiedades que pertenecían a los rohinyás en las aldeas de

<sup>52</sup> Véase, por ejemplo, Reuters, “Myanmar junta backs Telenor unit sale after buyer M1 pairs with local firm”, 20 de enero de 2022.

<sup>53</sup> Reunión con el Relator Especial, 14 de febrero de 2022.

<sup>54</sup> Véase A/76/314, anexo 1, secc. III (disponible en <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/MM/GA76report-annex-SR-Myanmar.pdf>), en el que se describen las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentaban los rohinyás en Myanmar en septiembre de 2021, y que persisten durante el período del informe.

las que fueron desplazados debido a los ataques de 2012, 2016 y 2017 han sido arrasadas y ahora son el lugar de nuevos proyectos comerciales, edificios gubernamentales o instalaciones militares<sup>55</sup>. Dadas las condiciones actuales, el Relator Especial considera que la situación en el estado de Rakáin no es propicia para el retorno voluntario y sostenible de los refugiados rohinyás desde Bangladesh.

## IX. Respuesta internacional

88. La población de Myanmar está profundamente decepcionada por la respuesta de las Naciones Unidas y la comunidad internacional a la crisis que ha seguido al golpe de Estado. Trece meses después de que los militares de Myanmar lanzaran un brutal asalto contra la población de Myanmar, todavía no se ha propuesto una resolución del Consejo de Seguridad. No se ha hecho ningún esfuerzo para restringir el acceso de la junta militar al sistema bancario internacional o su acceso a las armas, y no se sabe que ningún Estado Miembro haya congelado activos después de que los Estados Unidos lo hicieran inmediatamente después del golpe. Todavía no se ha adoptado un enfoque amplio y coordinado entre las naciones para imponer una presión económica más fuerte sobre la junta, incluida la creación de un grupo de tareas multinacional para identificar, perseguir y congelar los activos de los militares y sus camarillas, como viene instando el Relator Especial.

89. En el primer aniversario del golpe, el Consejo de Seguridad emitió un comunicado de prensa en el que expresaba su “profunda preocupación” por la violencia en el país. Pidió la liberación de la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi, del Presidente Win Myint y de otras personas detenidas arbitrariamente. Los activistas de Myanmar han expresado en repetidas ocasiones al Relator Especial su exasperación por las expresiones rituales de “preocupación” de la comunidad internacional que no van acompañadas de medidas concretas. El Consejo de Seguridad no ha ejercido las facultades que le concede el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para adoptar medidas concretas, o incluso estudiar la posibilidad de adoptarlas, para hacer frente a la crisis en Myanmar.

90. Como se describe en el reciente documento de conferencia del Relator Especial, varios Estados Miembros, incluidos dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, siguieron transfiriendo armas al ejército de Myanmar tras el golpe de febrero de 2021. Un mayor número de naciones transfirieron armas a Myanmar antes del golpe, pero después de que la misión internacional independiente de investigación sobre Myanmar presentara su informe de 2018<sup>56</sup> en el que describía la comisión de crímenes atroces por parte de los militares en los estados de Kachín, Rakáin y Shan. Estas transferencias representan probables violaciones del derecho internacional humanitario, del derecho de los tratados y del derecho internacional consuetudinario sobre la responsabilidad de los Estados.

91. A falta de medidas del Consejo de Seguridad, algunos Estados Miembros han tomado disposiciones para intentar reducir la capacidad de la junta de perpetrar graves abusos contra los derechos humanos. Entre ellas figuran la imposición de sanciones a personas o instituciones. Por ejemplo, el 21 de febrero de 2022, la Unión Europea dio el importante paso de imponer sanciones a la Myanmar Oil and Gas Enterprise.

92. Si no existe la voluntad política para una resolución del Consejo de Seguridad, debería considerarse inmediatamente una acción coordinada por parte de los Estados Miembros, como las medidas adoptadas dentro de los cuatro días posteriores a la invasión de Ucrania.

## X. Recomendaciones

93. **El Relator Especial recomienda a la junta militar que de inmediato:**

**a) Dimita y abandone el poder para que pueda reunirse un parlamento legítimo, elegido democráticamente, y formarse un gobierno;**

<sup>55</sup> Véase, por ejemplo, Amnistía Internacional, “Remaking Rakhine State”, 12 de marzo de 2018.

<sup>56</sup> [A/HRC/39/64](#).

b) Dé órdenes claras e inequívocas a las fuerzas de seguridad para que pongan fin a sus ataques contra el pueblo de Myanmar y se abstengan de violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario;

c) Deje de bloquear la entrega de ayuda humanitaria a las poblaciones vulnerables, incluidos los desplazados internos, y tome medidas proactivas para facilitar la entrega de ayuda por las ONG nacionales e internacionales;

d) Respete el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, entre otras vías poniendo fin a los ataques contra activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos, figuras políticas de la oposición y manifestantes pacíficos, y poniendo en libertad sin condiciones a las personas privadas de libertad por ejercer sus derechos;

e) Coopere plenamente con los funcionarios de las Naciones Unidas y los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, incluidos el Relator Especial y otros procedimientos especiales de las Naciones Unidas, la Enviada Especial del Secretario General sobre Myanmar, el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar y la Corte Penal Internacional.

94. El Relator Especial recomienda a las Naciones Unidas y sus órganos que:

a) Aprueben una resolución del Consejo de Seguridad en la que el Consejo: i) imponga un amplio embargo de armas a Myanmar, que incluya el combustible para aviones destinado al ejército; ii) imponga sanciones económicas selectivas al ejército de Myanmar, a sus dirigentes y a sus fuentes de ingresos, incluida la Myanmar Oil and Gas Enterprise; y iii) remita la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. La perspectiva de un veto por parte de un Estado Miembro en el Consejo de Seguridad no debería disuadir a otros miembros de presentar una resolución ante el Consejo para que se examine, debata y someta a votación;

b) Como mínimo, aprueben una resolución del Consejo de Seguridad por la que se establezca un embargo de armas que prohíba específicamente la venta de las armas y municiones asociadas que están matando a civiles de Myanmar, incluidos aviones a reacción, helicópteros de ataque, vehículos blindados, artillería ligera y pesada, misiles y cohetes que puedan atacar blancos terrestres, proyectiles de artillería y armas pequeñas;

c) Reconozcan al Gobierno de Unidad Nacional como fuente y asociado de confianza para hacer frente a la crisis en Myanmar, en particular en lo relativo a la prestación y apoyo humanitario, sanitario, educativo y de otro tipo a la población civil.

95. El Relator Especial recomienda a los Estados Miembros que:

a) Detengan de inmediato la venta o transferencia de armas y tecnología de doble uso a Myanmar y garanticen que el combustible aeronáutico no se transfiera al ejército de Myanmar;

b) Organicen una coalición de naciones con el objetivo de ejercer una presión fuerte y sostenida sobre la junta militar mediante, entre otras cosas, sanciones económicas coordinadas y específicas y embargos de armas y tecnología de doble uso; las sanciones deberían aplicarse en la mayor medida posible y dirigirse a las empresas de propiedad militar o controladas por el ejército, incluida la Myanmar Oil and Gas Enterprise;

c) Establezcan un grupo de tareas multinacional para identificar, rastrear y congelar los activos de los militares y sus camarillas;

d) Sancionen a las personas y entidades implicadas en la importación y exportación de armas entre Myanmar y otros países, incluidas las personas y entidades con sede en Myanmar que sirven de intermediarias en el comercio de armas<sup>57</sup>;

<sup>57</sup> Véase, por ejemplo, Justice for Myanmar, “Military-linked companies procured USD millions in arms and military equipment”, 7 de febrero de 2022.

e) Priven de legitimidad a la junta rechazando su reconocimiento ante los organismos internacionales, incluidas las Naciones Unidas, y retirando las invitaciones de los foros y las funciones internacionales a los funcionarios de la junta;

f) Reconozcan al Gobierno de Unidad Nacional como representante de la voluntad soberana del pueblo de Myanmar y como fuente y asociado de confianza para participar en la distribución de ayuda humanitaria, sanitaria, educativa y de otro tipo para el pueblo de Myanmar;

g) Apoyen los esfuerzos para que los autores de crímenes atroces rindan cuentas ante tribunales imparciales e independientes, incluidos la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y los tribunales nacionales de los países con leyes de jurisdicción universal;

h) Aumenten la asistencia humanitaria para el pueblo de Myanmar, en particular financiando plenamente el Plan de Respuesta Humanitaria para Myanmar de 2022.

96. El Relator Especial recomienda a los donantes que prestan apoyo a la sociedad civil de Myanmar y a la respuesta humanitaria y de derechos humanos al golpe de Estado que:

a) Proporcionen una financiación sólida para las actividades de investigación y defensa en pro de los derechos humanos y los intereses de los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los abogados, los defensores de los derechos de la mujer, la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual, la comunidad de personas con discapacidad y otros grupos de riesgo en Myanmar;

b) Adopten soluciones creativas para hacer frente a las dificultades operacionales de las organizaciones en Myanmar, por ejemplo flexibilizando los requisitos de presentación de informes, adoptando métodos alternativos de transferencia de fondos, absteniéndose de exigir el registro ante las autoridades de Myanmar y pasando de las subvenciones restringidas a la financiación básica siempre que sea posible.

97. El Relator Especial recomienda al Gobierno de Unidad Nacional que:

a) Dé a conocer y promueva el código de conducta del Gobierno de Unidad Nacional y la Fuerza Popular de Defensa, que proporciona orientación sobre el derecho de los conflictos armados y el trato a los civiles, y tome todas las medidas necesarias para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y otras vulneraciones de derechos;

b) Prosiga sus esfuerzos para conseguir los recursos necesarios a fin de atender las necesidades del pueblo de Myanmar, incluidas las vacunas contra la COVID-19, la ayuda humanitaria y otros recursos vitales;

c) Continúe trabajando para que los autores de crímenes atroces masivos rindan cuentas ante un tribunal imparcial e independiente, en particular la Corte Penal Internacional;

d) Proporcione a la comunidad internacional, incluidos los Estados Miembros, información, análisis y recomendaciones para apoyar al pueblo de Myanmar y ayudar a generar la presión necesaria para liberar al país de su ocupación por las fuerzas de una junta militar ilegal.

98. El Relator Especial recomienda a la comunidad internacional de empresas e inversores que:

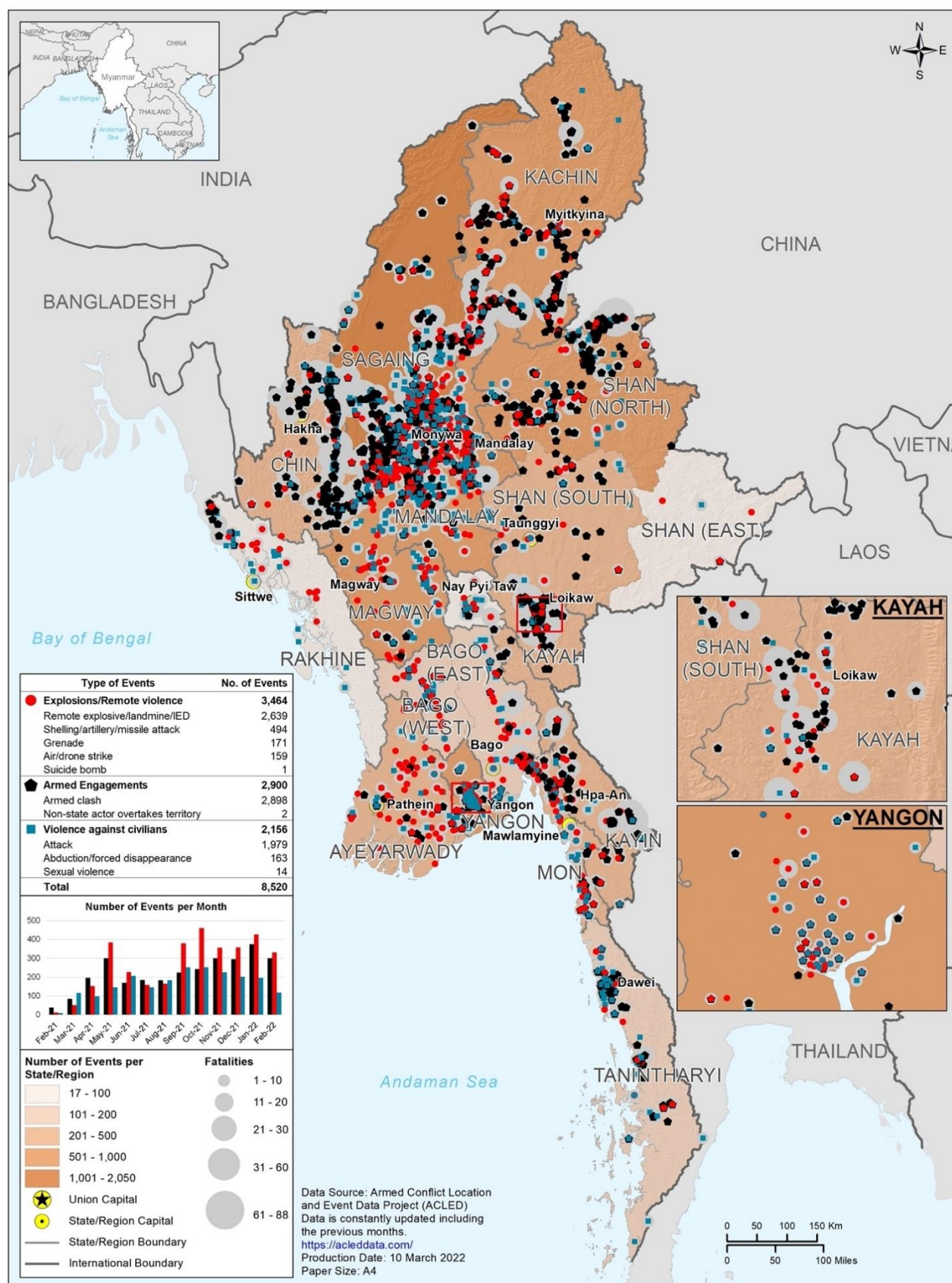
a) Examine en qué medida sus inversiones están expuestas a fabricantes de armas que han vendido armas al ejército de Myanmar en apoyo de sus crímenes atroces y tomen medidas con arreglo a sus propias políticas de derechos humanos y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos;

b) Ponga fin a las inversiones en empresas implicadas en operaciones comerciales que prestan un apoyo sustancial a la junta militar de Myanmar.

## Annex I

Graphic

Armed engagements and other attacks in Myanmar, 1 February 21–28 March 2022



Disclaimer: The boundaries and names shown, and the designations do not imply any opinion or endorsement of these terms by the United Nations.

## Annex II

### December 2021 Bangladesh mission findings and conclusions

1. Approximately 1 million Rohingya refugees are currently in Bangladesh where they were forced to flee following attacks by the Myanmar military that began in the 1990s. Over 700,000 arrived after escaping the Myanmar military's genocidal attacks in 2016 and 2017.
2. Providing shelter and support for victims of gross human rights violations and atrocity crimes for over a decade would be challenging for any nation under the best of circumstances. But for Bangladesh, categorized as a least developed country and one of the most densely populated in the world, it is an even greater challenge. It should come as no surprise, then, that some in Bangladeshi communities where Rohingya refugees are staying have exhibited signs of frustration, resentment and even hostility to both Rohingya refugees and the international community.
3. The Government and the people of Bangladesh deserve recognition and appreciation for saving the lives of untold numbers of Rohingya. Without Bangladesh sheltering the Rohingya when they were literally running for their lives – with the Myanmar military in some cases firing on them as they entered Bangladesh – the death toll would have been significantly higher.
4. The same military that ruthlessly attacked the Rohingya in Rakhine State and drove them to Bangladesh are now attacking communities throughout Myanmar, following an illegal attempted military coup in February 2021. This makes the prospect of the repatriation of the Rohingya to their home villages ever more distant. This tragic state of affairs is making the level of frustration even greater for some Bangladeshis and conditions for Rohingya refugees even more difficult and, in some instances, dangerous.
5. It is imperative that the international community provide the government and people of Bangladesh with the recognition that they deserve of the extraordinary role that they have played in saving and supporting the Rohingya. Even more importantly, it is critical that there be an increase in the level of support that the international community is willing to provide Bangladesh to meet its obligations. As part of their support to Bangladesh and the Rohingya, Member States should offer resettlement opportunities to Rohingya who seek voluntary resettlement. This should be done in coordination and in large numbers.
6. At the same time, the Rohingya community has the right to expect that their fundamental human rights will be respected, and their health and safety will be protected. It is important that the international community, including the United Nations, Member States and human rights and humanitarian organizations, advocate for and stand with the Rohingya when their human rights, health, safety, and other basic needs are threatened or compromised. The UN Human Rights Council is in an important position to help meet this responsibility. The Special Rapporteur travelled to Bangladesh, and is issuing this report, to assist the UN Human Rights Council to meet this critically important role.
7. The Special Rapporteur had the honour of meeting with Rohingya refugees in Cox's Bazar and on Bhasan Char island – where over 20,000 Rohingya have been relocated by the Government since December 2020 – during his mission to Bangladesh from 13-19 December 2021. With very few exceptions, the dozens of refugees who the Special Rapporteur spoke with want to return to their homes in Rakhine State when conditions allow for a voluntary, safe, sustainable, and dignified return. Those conditions currently do not exist, and it will realistically be some time before they do. As such, the principle of non-refoulement must always be respected.

8. The following are some of the key issues raised by Rohingya refugees to the Special Rapporteur during his discussions with them in the Refugee Camps in Cox's Bazar as well as on Bhasan Char island.<sup>1</sup> He also includes the responses of the Government of Bangladesh.

## A. Cox's Bazar Camps

9. *Security*: Rohingya living in the refugee camps in Cox's Bazar consistently highlighted security concerns within the camps as a major issue affecting their lives. While other criminal elements operate in the camps, refugees made it clear that their concerns stemmed, in large part, from violence and intimidation perpetrated by the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) – a Rohingya-led non-state armed group active in the camps and in Myanmar.

10. The Special Rapporteur spoke with numerous Rohingya who – according to their own testimony – had either been kidnapped by ARSA, intimidated by ARSA, or who had family members killed by ARSA. Security concerns are especially pronounced for women and girls. For example, one individual's daughter was kidnapped to enter into a forced marriage with an ARSA member. Parents made clear that they fear for their children and particularly for their daughters' safety and are hesitant to allow them to move freely in the camps.

11. The Special Rapporteur spoke with numerous Rohingya civil society members and human rights defenders who have particular and very serious security concerns. The murder of human rights defender Mohibullah, demonstrates, in the starkest of terms, the threats faced by Rohingya activists. Many other Rohingya civil society actors and human rights defenders continue to receive death threats, including from organized criminal elements they identify as ARSA. Some of these individuals are living in hiding and have fled the camps. Others remain in the camp but are at high risk of violence. As a result of the threats to Rohingya human rights defenders, the Special Rapporteur has learned that a once vibrant Rohingya civil society is now barely functioning.

12. When the Special Rapporteur brought these security concerns to the Bangladesh Government, highlighting the dangers that the Rohingya claimed that ARSA was creating, senior officials were often dismissive of the claim and attributed security issues in the Cox's Bazaar camps to unspecified criminal gangs and miscreants.<sup>2</sup> These officials insisted that there is no ARSA presence in the refugee camps. Despite this, the Special Rapporteur takes note of recent arrests of high-ranking ARSA leaders in Bangladesh.<sup>3</sup>

13. Security officials in the camps should work closely with the Rohingya community and thoroughly investigate all complaints attributed to ARSA – and all other criminal activity – and the impact that it is having on the community.

14. At the same time, the Bangladesh Government should work closely with UNHCR to ensure that Rohingya human rights defenders and civil society members under threat receive adequate protection, including through expeditious third-country resettlement. The Special Rapporteur urges that all those identified as having acute protection vulnerabilities, as well as their immediate family members, be resettled as soon as possible. Strong security measures should also be put in place that protect human rights defenders and civil society working in the camps.

<sup>1</sup> For additional information on the Special Rapporteur's mission to Bangladesh, see "Mission to Bangladesh 13–19 December 2021: End of Mission Statement," UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar-Tom Andrews, 19 Dec 2021, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=28001&LangID=E>.

<sup>2</sup> See also "UN rapporteur: Rohingya militants kill, abuse refugees in Bangladesh camps," Radio Free Asia, 20 Dec 2021, <https://www.rfa.org/english/news/myanmar/un-rohingya-12202021171519.html>

<sup>3</sup> Bangladesh arrests Rohingya cleric over murder of activist, France 24 (AFP), 6 March 2022, <https://www.france24.com/en/live-news/20220306-bangladesh-arrests-rohingya-cleric-over-murder-of-activist>; Bangladesh arrests brother of Rohingya armed group leader, Al Jazeera, 16 Jan 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/1/16/bangladesh-arrests-brother-of-rohingya-insurgency-leader>.

15. Bangladesh should promote and protect the operations of Rohingya-led civil society, so that they can work together to identify and solve a full range of problems and challenges in the camps. This will help to amplify moderate voices to counteract hard line and armed actors and build confidence as solutions are identified and pursued.

16. The Special Rapporteur was informed that the barbed-wire fence surrounding the camps was constructed to protect Rohingya from criminal activities from the outside. Some of the Rohingya refugees with whom he spoke claimed, however, that the fencing was not only ineffective in achieving this purpose but made residents more vulnerable to dangers such as fires. The Special Rapporteur encourages authorities to examine these concerns with the input of camp residents and that options, such as the construction of additional egress points, be considered.

17. The Special Rapporteur was informed that humanitarian organizations are facing challenges in providing aid, including complex administrative procedures and gaining access to those in need. He urges the government to work with humanitarian organizations and the Rohingya community to identify options to enhance the efficient and effective delivery of humanitarian aid.

18. *Education:* Nearly every Rohingya parent who the Special Rapporteur spoke with cited education shortfalls as their most pressing concern for their children. 52 percent of the estimated 918,841 Rohingya (or 477,797) in Bangladesh are children under the age of-18. The Special Rapporteur takes note that the education needs for the children and youth in camps are tremendous.<sup>4</sup> In 2021, an estimated 515,042 Rohingya aged 3-24 needed education opportunities. However, the Special Rapporteur notes 2021 funding targets in the Joint Response Plan only aimed to provide education, to 390,923 of them (100 percent of the 3–5 age group, 100 percent of 6–14, 70 percent of 15–18, and 15 percent of 19–24). According to the Inter-Sector Coordination Group (ISCG) Education Sector only 62 percent of the education plan was in fact funded (as of 30 October 2021). Bangladesh needs a significantly stronger level of support from the international community if this gap is going to be overcome.

19. A key source of education in the camps are government-approved Learning Centers, which teach primary children up to the age of 14. The Special Rapporteur is pleased to see the Bangladesh Government's Refugee Relief and Repatriation Commissioner's (RRRC) directive, ordering the reopening of all 3,000 Learning Centers in Cox's Bazar effective 2 March 2022, after being mostly closed due to COVID-19 since March 2020. If fully reopened, the Learning Centers should be able to provide education to 70 percent of primary school aged children. This is a positive step forward for Rohingya children and their families. The education needs of the remaining 30 percent of children needing access to education must also be addressed.

20. While noting the serious challenge in providing universal education in this complex environment, parents expressed concerns that the Learning Center curriculum, the Learning Competency Framework Approach (LCFA), was not rigorous – as it uses neither the Bangladesh nor Myanmar curriculum – and did not result in any formal certificate upon completions of grades. The Special Rapporteur is encouraged that the Bangladesh Government has authorized the implementation of the long-delayed (due to COVID) Myanmar Curriculum Pilot (MCP), which uses the same Myanmar curriculum as Myanmar primary and secondary education facilities. Approximately 400 Rohingya students were receiving an education under the MCP at the time of the Special Rapporteur's mission, with plans to roll it out to 10,000 students. The Special Rapporteur urges that this policy be swiftly and broadly implemented across all Learning Centers in the camps.

21. Alongside the Learning Centers, there are two additional forms of educational facilities critical to trying to meet the needs of Rohingya students: home-based/community-based learning centers (HBLCs/CBLFs) and, wholly Rohingya-run "private schools". HBLCs/CBLFs are also government approved, though are run by humanitarian organizations

<sup>4</sup> UNHCR, Bangladesh Operational Update, Jan 2022, [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Bangladesh%20Operational%20Update\\_January%202022.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Bangladesh%20Operational%20Update_January%202022.pdf).

as alternatives for children who have difficulties attending or cannot attend Learning Centers. The Rohingya community itself set up private schools to address the deficit of education opportunities, in particular the lack of any educational opportunities beyond primary school education. The Special Rapporteur understands that HBLCs/CBLFs and private schools provide education to an estimated 60,000 Rohingya students, the majority of whom are girls.

22. On 13 December 2021, while the Special Rapporteur was in Bangladesh, the RRRC issued a directive, communicating a series of restrictive measures impacting refugees' access to education, including: (1) ordering home-based/community-based learning centers be closed across camps with immediate effect; (2) abolishing all private learning centers, and (3) limiting the salaries of teachers to a maximum of 10,000 taka (approximately USD \$116) per month. The Special Rapporteur has received information that the Bangladesh Government has begun closing private schools throughout the refugee camps. He has also learned that the government is examining the HBLCs/CBLFs before making a final determination on their continued operations. The Special Rapporteur strongly believes that shutting down these educational facilities, when there is a significant shortfall of freely available educational opportunities for Rohingya children and young people, is counterproductive and would deny the right of education to many child refugees, particularly girls. An estimated 60,000 students will lose education opportunities if the circular is fully implemented, and the Special Rapporteur respectfully urges the Government of Bangladesh to reconsider.

23. A Bangladesh senior official responded to the Special Rapporteur's concerns regarding the education facility closures by stressing that (1) "these [Rohingya] are the people who have never been allowed to go to the schools in Myanmar," (2) there is a lack of qualified teachers in the Rohingya community to provide good education, and (3) there is a potential for radicalization to occur in the unauthorized private schools. The Special Rapporteur is concerned that a senior government official would dismiss concerns about education for Rohingya children because of the horrible conditions that Rohingya families faced in Rakhine State. Reducing teacher salaries – as the 13 December circular mandates – is counterproductive to recruiting better qualified teachers. To address the potential for radicalization, closer engagement with the Rohingya community, the promotion of a vibrant moderate Rohingya civil society, and similar measures would be a more equitable approach than the closure of all private schools.

24. *Livelihoods:* Livelihood opportunities for the Rohingya, including opportunities to work with humanitarian organizations and small-scale market activities, are an avenue for developing skills that enable them to contribute to the economy, support a family, enhance dignity, and provide a productive use of their time.

25. While on mission, the Special Rapporteur witnessed a particularly stark rolling back of livelihood opportunities. He visited what used to be a Rohingya market inside Kutapalong camp before Bangladesh officials destroyed it using heavy equipment just days prior. The destruction of the shops is part of an effort – ongoing since at least October 2021 – to demolish "illegal" shops in all camps.<sup>5</sup> Standing on top of debris from the newly destroyed shops, a former shop owner told the Special Rapporteur, "I sold fruit, vegetables, biscuits. My shop made my life a little easier ... I had been operating my shop for four years, after three months of arriving in Bangladesh from Myanmar. The Camp in Charge did not tell us why they were going to destroy my shop, only that it would be destroyed." The Bangladesh Government has destroyed thousands of these shops throughout numerous camps.

26. In response to the Special Rapporteur raising this issue, a senior Bangladesh Government official responded, "Livelihood opportunity is not the responsibility of Bangladesh" and that "if we allow unauthorized shops, they bring *yaabaa* (methamphetamine pills) ... these shops are the real centers of *yaabaa*." The Special Rapporteur respectfully asks the Government of Bangladesh to reconsider its position on the issue of markets, and more broadly, encourages the Bangladesh government to expand livelihood opportunities, making options for youth and women a priority. Helping to create opportunities to earn

<sup>5</sup> Bangladesh authorities bulldoze 1,000 Rohingya shops, AFP, 12 Oct 2021, <https://www.msn.com/en-xl/news/newsworld/bangladesh-authorities-bulldoze-1000-rohingya-shops/ar-AARGqWs>.

money through legitimate activities, such as operating a shop or working with humanitarian organizations, can help to undermine illegitimate activity, including the marketing and use of illicit drugs.

27. *COVID-19 Vaccinations:* The Bangladesh Government has taken considerable efforts to vaccinate the Rohingya population in Cox's Bazar as they had been included in the national COVID-19 vaccination campaign, a step to be commended. As of the end of February 313,720 Rohingya are fully vaccinated. This is 73 percent of the targeted 18 and over population. An additional 65,600 people have received a first dose.

## **B. Bhasan Char**

28. Prior to the Special Rapporteur's mission, UNHCR, on behalf of the UN agencies involved in the Rohingya response, and the Bangladesh Government signed a Memorandum of Understanding (MOU) regarding the United Nation's involvement in protection humanitarian assistance on Bhasan Char. The MOU includes express commitments regarding protections for fundamental rights, including the right to voluntariness, the right to education, health care, and opportunities for livelihood. Regarding freedom of movement, the MOU explains that movement to and from the island will be permitted, with specific modalities to be determined.

29. Almost all Rohingya that the Special Rapporteur spoke with on Bhasan Char highlighted improved security on the island over security in Cox's Bazar. Women refugees expressed relief at no longer fearing attacks while going to use the bathrooms and had little to no fear that their daughters would be attacked.

30. The Government has obviously spent considerable resources in constructing the facilities on Bhasan Char. Structures, including residential housing, appear well constructed and are considerably stronger and more durable than those in Cox's Bazar. Unfortunately, accessibility for persons with disabilities was clearly not factored into the planning and construction process. Accessibility is the least expensive when done at the early stage of a development.

31. While Rohingya had fewer security concerns on the island, those Rohingya the Special Rapporteur spoke with were dismayed at the lack of critical services on Bhasan Char. What made this particularly problematic was the gap between what was promised and what the Rohingya found when they arrived on the island. Many spoke of being promised livelihood opportunities, schools for their children, and access to quality health care. All spoke of their disappointment and frustration with what actually existed.

32. At the time of the Special Rapporteur's mission, schooling was essentially non-existent on the island, with only very limited programming for a limited number of very young children. The Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) NGO told the Special Rapporteur of plans to open 30 new Learning Centers in 2022. The Special Rapporteur urges that these plans come to fruition quickly. Even if they do, the Special Rapporteur is unaware of education opportunities being planned for children past primary school.

33. The Special Rapporteur toured two medical facilities on the island, one 20-bed hospital run as a joint Bangladesh Government/local NGO operation and one UNHCR-supported hospital, which was just beginning services. Physicians at the government-run hospital explained to the Special Rapporteur that they were capable of handling routine medical cases, however, where specialists or general anaesthesia was required, patients would need to travel by boat to the mainland (to Noakhali). The Special Rapporteur met with refugees with various medical ailments, including a large untreated and undiagnosed goitre, a substantial and obvious eye problem, ambulatory problems, and dermatological issues. All of these individuals reported that they had not been able to have their ailments treated on the island and would need transportation to Noakhali. Some explained that this required payment for services with money they did not possess; thus, their medical conditions remained untreated.

34. The Special Rapporteur was briefed on substantial plans for livelihood programming, including fishing, sewing, skills training, and horticulture. Local NGOs and Government representatives reported, however, that only very limited and basic opportunities in these areas are currently available. The Special Rapporteur urges that the plans described to him are swiftly brought into fruition.

35. The biggest single concern raised by most who spoke with the Special Rapporteur, was freedom of movement to and from Cox's Bazar. At the time of the Special Rapporteur's visit, he learned that the Bangladesh Navy had provided one round trip to approximately 60 Rohingya to travel to Cox's Bazar, with plans to undertake two trips per month moving forward. The Special Rapporteur arrived near the one-year anniversary of the first relocations to Bhasan Char, meaning for a year there were no movement opportunities.

36. For the principle of freedom of movement to be realized, there must be reliable, regularly scheduled, and free transportation to and from the island that can meet the needs of the Rohingya people. To give one example of the hardships that failing to provide freedom of movement creates, the Special Rapporteur spoke with a woman on Bhasan Char whose husband had remained in Cox's Bazar and became severely ill. She was devastated that she was unable to travel back to the mainland to visit him prior to his death due to the lack of freedom of movement.

37. In response to the Special Rapporteur raising concerns over freedom of movement, a senior Bangladesh official told him, "Freedom of movement is a relative term. Look at the Rohingya's situation in Myanmar." He added, "If we allow freedom of movement, they will escape. They might end up in Dhaka or different countries, or trafficked on a boat, and we want to protect the safety and security of the Rohingya people." The safety and security of the Rohingya on Bhasan Char is not enhanced by denying regular, reliable transportation to and from the island. In fact, just the opposite is true, particularly for those who have, or may develop, medical conditions that cannot be met on the island. The denial of the Rohingya's fundamental right to movement in Rakhine State, Myanmar should not be a basis for the denial of these rights on Bhasan Char. Unless they are in detention, Rohingya refugees cannot "escape."

38. The dichotomy between the realities on Bhasan Char compared to how it is presented to perspective inhabitants raises serious concerns about informed consent and thereby voluntariness in the relocation process.

39. The Special Rapporteur also received reports of coercion or pressure on Rohingya to relocate to Bhasan Char. While in Bangladesh the Special Rapporteur received reports, and spoke directly with an individual, who was part of a group directly threatened by local Bangladesh authorities with destruction of their property if they did not board buses for relocation to Bhasan Char. Those threatened ultimately refused and the situation reportedly deescalated with no one being sent to the island against their will. However, even after departing Bangladesh, the Special Rapporteur continued to receive reports of coercive actions, including of local authorities threatening to confiscate identity cards and relocation to Bhasan Char if certain individuals themselves did not convince family members to relocate. These disturbing developments should be investigated and those who are responsible should be held accountable.

40. When raising instances of potential involuntary transfers, or attempted coercion, senior Bangladesh officials maintained that there was "no coercion." To ensure that there are no future issues of involuntary transfers or lack of informed consent, the Special Rapporteur recommends a process by which an independent stakeholder, such as the UNHCR, monitors the process to enable the Government to ensure the voluntariness of everyone slated for relocation.

41. Above all, the Special Rapporteur maintains his position that further relocations to Bhasan Char should only occur when adequate services, freedom of movement, and voluntariness are established for those already living on the island, as well as ensuring that such services are sufficient to meet the needs of the projected population on the island. Increasing the population on the island, without first addressing the shortcomings noted, will make a difficult situation for many considerably worse.

### **C. Conclusions on Bangladesh Mission**

42. In an exchange with senior officials at the conclusion of his mission, the Special Rapporteur was informed that the government of Bangladesh did not agree with many of his observations. The Special Rapporteur indicated that these observations were based on his own interactions since his arrival in Bangladesh, credible information provided by Rohingya with whom he met, as well as other interlocutors. He observed a pattern to the responses he received: If markets are allowed to provide livelihood opportunities, they will be used to sell drugs; if greater freedom of movement is allowed, the Rohingya will “escape”; if private schools are permitted, they will breed extremists. The Special Rapporteur is concerned that dismissing these issues will not only deny fundamental rights, but is also self-defeating, fostering conditions that are against the interests of Rohingya refugees, the Bangladesh government and host communities. The Special Rapporteur urges that the government re-examine these issues and concerns and that Rohingya refugees be engaged and consulted toward the identification and pursuit of practical solutions that are of benefit to everyone.

43. The cause of this crisis, and the ultimate resolution of this crisis cannot be found in Bangladesh, but in Myanmar. The Special Rapporteur will do everything in his capacity to push for a stronger, more coordinated international response to this crisis, including the imposition of pressure on the Myanmar military and for concrete measures to hold the military junta fully accountable for this crisis, with the ultimate goal of repatriation of the Rohingya to their homelands in a voluntary, safe, sustainable, and dignified manner.

44. The Special Rapporteur is grateful for the cooperation and considerable effort the Government of Bangladesh undertook in providing him with access to camps in Cox’s Bazar and Bhasan Char. The Special Rapporteur would like to reiterate his appreciation to the government and people of Bangladesh whose willingness to open their communities to the Rohingya as they ran from a genocidal attack by the Myanmar military saved untold numbers of lives.

---